

Las alianzas políticas en el gobierno de la Unidad Nacional. Cambios en las alianzas del bloque hegemónico colombiano del siglo XXI.

Liliana Pardo Montenegro.

Cita:

Liliana Pardo Montenegro (1). *Las alianzas políticas en el gobierno de la Unidad Nacional. Cambios en las alianzas del bloque hegemónico colombiano del siglo XXI*. Revista Cuadernos del GESCAL. Memorias del Grupo de Estudios Sobre Colombia y América Latina, 1 (1), 79-95.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/publicaciones/9>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pQ6r/8Ap>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Las alianzas políticas en el gobierno de la unidad nacional

*Cambios en las alianzas partidarias del
bloque hegemónico colombiano del siglo XXI⁵⁴*

Liliana Pardo Montenegro

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

Resumen: Los acontecimientos de la historia reciente permiten visualizar las fracciones de poder político en las alianzas partidarias que conforman el bloque hegemónico del gobierno representado por el presidente Juan Manuel Santos, a la luz de los intereses expresados en el proyecto de la “Unidad Nacional”. Para indagar este asunto, proponemos reseñar un breve panorama de la dinámica del sistema de partidos colombiano desde mediados del siglo XX hasta la Reforma Política del año 2003, revisar algunos aspectos teóricos de los partidos políticos y de los movimientos sociales, y con esto, analizar el tejido de las alianzas dominantes y de las alternativas sociales y políticas a la coalición de gobierno. Lo cual nos lleva a constatar que las alianzas políticas se trazan, por un lado, entre los partidos tradicionales, el poder político emergente y el poder económico que obedece a una clase social propietaria, terrateniente, con vínculos en el sistema financiero y en el sector industrial; y por otro lado, entre unas alternativas sociales y políticas que enfrentan fuertes problemas de desigualdad política, social y económica. A su vez, que las alianzas de las clases dominantes se encuentran en una disputa histórica en Colombia y que las alternativas de la izquierda afrontan una fatal división entre sus micro tendencias.

Palabras clave: Colombia, Alianzas políticas, Juan Manuel Santos.

⁵⁴ Este artículo es una reelaboración del trabajo final presentado al seminario “Teoría y análisis de los partidos” a cargo del Dr. Cesar Tcach, en el marco del Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se presentó como ponencia al VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ALACIP, Quito, 12 al 14 de junio de 2012, en el marco de la Mesa de Trabajo del Grupo Clacso “Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes”. También fue publicado en la Revista Espacio Crítico N°.16, 2012. Como fruto de los avances de investigación del proyecto de tesis de maestría, fue actualizado y presentado en las 1ras Jornadas del Grupo de Estudios Sobre América Latina y el Caribe (GESCAL) realizadas en la Universidad de los Andes, el 27 de noviembre en Bogotá.

Political Partnerships in the government of national unity

*Changes in party alliances in the colombian
hegemonic bloc in the 21st Century*

Abstract: A consideration of recent historical events allows us to visualize the fractions of political power in the party alliances that make up the hegemonic governing bloc represented by President Juan Manuel Santos in light of the interests expressed in the “Unidad Nacional” (“National Unity”) project. To study this issue, we propose giving a brief panorama of the dynamics of the Colombian party system from the middle of the 20th century until the Political Reform in 2003, reviewing some theoretical aspects of these political parties and of social movements, and thereby analyzing the web of dominant alliances and social and political alternatives to the government coalition. We affirm that these political alliances are formed, on the one hand, between the traditional parties, the emerging political power, and the economic power which obeys a proprietary, land-holding social class with connections to the financial system and the industrial sector; and, on the other hand, between some social and political alternatives that face serious problems of political, social, and economic class inequality. Likewise, we affirm that the alliances within the dominant classes are in a historic dispute in Colombia and that leftist alternatives face a fatal division between their micro-tendencies.

Keywords: Colombia, political alliances, Juan Manuel Santos

As alianças políticas no governo da Unidade Nacional

*Mudanças nas alianças partidárias do bloco
hegemônico colombiano do século XXI*

Resumo: Os acontecimentos da história recente permitem visualizar as frações de poder político nas alianças partidárias que formam o bloco hegemônico do governo representado pelo presidente Juan Manuel Santos, a luz dos interesses expressados no projeto da “Unidad Nacional”. Para indagar este assunto, propomos resenhar um breve panorama da dinâmica do sistema de partidos colombiano, desde meados do século XX até a Reforma Política do ano 2003, revisar alguns aspectos teóricos dos partidos políticos e dos movimentos sociais, e com isso, analisar o tecido das alianças dominantes e das alternativas sociais e políticas à coalizão do governo. O qual nos leva a constatar que as alianças políticas são traçadas, por um lado, entre os partidos tradicionais, o poder político emergente e o poder econômico que obedece a uma classe social proprietária, latifundiários, com vínculos no sistema financeiro e no setor industrial; e por outro lado, entre umas alternativas sociais e políticas que enfrentam fortes problemas de desigualdade política, social e econômica. Por sua vez, que as alianças das classes dominantes encontram-se numa disputa histórica em Colômbia e que as alternativas da esquerda afrontam uma fatal divisão entre suas micro tendências.

Palavras chaves: Colômbia, Alianças políticas, Juan Manuel Santos

Los partidos políticos en Colombia

Los partidos políticos en Colombia tienen una historia arraigada en el bipartidismo tradicional, que data, con sus alternancias hegemónicas, desde la creación del Partido Liberal Colombiano en el año 1848 y el Partido Conservador Colombiano en el año 1849 hasta la reforma constitucional de 1991. En la división temporal de la dinámica partidaria a partir de la segunda mitad del siglo XX, se pueden resaltar cuatro momentos: 1) el sistema de consociacionalismo del Frente Nacional (1958-1974) como alternancia pactada entre los dos partidos dominantes y la limitación de participación y aniquilación de otras fuerzas políticas; 2) las luchas internas entre fracciones liberales desde 1974 hasta la asamblea constituyente en 1990; 3) la dinámica de partidos de la constitución de 1991 hasta la reforma política del año 2003; y en el análisis del siglo XXI agregamos como último momento, 4) la implementación de la reforma política desde el año 2003, en el supuesto paso a un multipartidismo moderado y una reordenación institucional del sistema partidario colombiano.

El bipartidismo colombiano fue erosionándose durante el contexto de violencia que vivió Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal radical, en 1948, y una progresiva crisis de legitimidad del sistema político bajo el control de los partidos tradicionales. Posteriormente, en el Frente Nacional la caída de los partidos tradicionales fue producto del clientelismo repartido entre liberales y conservadores, lo cual produjo una apatía ciudadana a la política electoral, que tomo en los años setenta, la vía de movilización social en el Paro Cívico Nacional de 1977 y en marchas campesinas que posicionaron una fuerza política en las calles. Esta década ha sido caracterizada por Francisco Gutiérrez (2007) como la composición política de nuevas alianzas de “élites agrarias, narcotraficantes y paramilitares” y la transformación de las prácticas políticas en el auge de nuevos actores vinculados a la economía ilegal y los circuitos de la guerra.

Al terminar el Frente Nacional, la fuerza política predominante fue el Partido Liberal, en fracciones de personalismos regionales. La elección de Alfonso López Michelsen (1974-1978) con su lema “Mandato claro” y su frente disidente el Movimiento Revolucionario Liberal, puso en evidencia las luchas internas de los liberales hasta la asamblea constituyente en 1990. Durante este periodo, por tendencia liberal se llevaron a cabo los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) quien ejecuto la política represiva del Estatuto de seguridad nacional; y el de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) que introdujo el esquema Gobierno-oposición y dio el primer paso hacia las reformas neoliberales y los procesos de paz con algunos grupos guerrilleros que finalmente se desmovilizaron en los años noventa, entre estos, el M-19, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

Por parte del partido conservador, gobernó Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), gobierno que decretó la amnistía para los grupos guerrilleros y estableció la Ley 85 de 1985 por medio de la cual se reglamentaba el Estatuto Básico de los Partidos. Tal Estatuto, procuraba una nueva alternancia de fuerzas políticas en elecciones, lo que dio paso a un sistema bipartidista atenuado, conformado por los dos partidos tradicionales y por “terceras fuerzas” de todo tipo y tamaño (Pizarro, 2002; y Ungar y Arévalo, 2004). El modelo de bipartidismo atenuado hace referencia a la creación de “micro-empresas electorales” para designar la “atomización personalista” de las fracciones de los partidos tradicionales que protagonizó el sistema de partidos en Colombia.

A partir de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución de 1991, el propósito fue brindar las garantías para el desarrollo de elecciones y para que los partidos y movimientos políticos tuvieran plenas libertades legales de presentar candidatos a elecciones nacionales y para llevar a cabo sus actividades políticas en elecciones (Giraldo:

127). Sin embargo, esto solo reforzó una serie de “micro-empresas electorales” con resultados de votos favorables a las fracciones del Partido Liberal.

Por otra parte, la noción “micro-empresas electorales” es una mirada institucionalista de los sistemas de partidos, que no menciona el proceso de violencia política que sufrieron las “terceras fuerzas” al lanzar candidaturas democráticas a la presidencia de la República y otros escaños locales, dado que en la apuesta electoral fueron asesinados los líderes más sobresalientes para la construcción de una alternativa de poder distinta a los partidos tradicionales. En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, ex-candidato a la presidencia por la Unión Patriótica; en 1989, fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato a la consulta interna del Partido Liberal; en 1990, fueron asesinados Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19; y Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica, entre otros miles de líderes desaparecidos de manera sistemática.

La década de los noventa y los primeros años del siglo XXI en Colombia, se ha caracterizado por una alianza de los partidos tradicionales, los carteles del narcotráfico, los actores armados del paramilitarismo y los intereses económicos en megaproyectos transnacionales. En la atomización del sistema de partidos, el Partido Liberal Colombiano con su fraccionalismo interno, obtuvo el poder ejecutivo durante dos periodos de gobierno, el de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) reconocido por la implementación directa de las políticas neoliberales, la apertura del libre comercio y la política de internacionalización de la economía; y el de Ernesto Samper (1994-1998) que planteó en el discurso de su gobierno la distribución de los recursos de forma equitativa y en la práctica continuo las políticas del neoliberalismo.

Las fracciones internas conservadoras fueron unificadas por la “Alianza para el Cambio” que congregó al Movimiento “Nueva Fuerza Democrática” y al “Movimiento de Salvación Nacional” en la elección de Andrés Pastrana (1998-2002). El lema de su Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz” marcó su política del frustrado proceso de diálogo con las FARC para un acuerdo de paz. En el año 2001 decretó la Ley anual del Presupuesto, que dio lugar al despido masivo de trabajadores estatales y la paulatina privatización del sector público, en consonancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional – FMI. Además, durante su periodo de gobierno fue aprobado el Plan Colombia, como condicionante económico-militar de las relaciones y acuerdos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

En este mismo año 2001, se firmó el “Pacto de Ralito”, un acuerdo de dirigentes políticos y jefes de los bloques paramilitares, en el cual se propuso “penetrar las estructuras nacionales de representación política”. Así, el fenómeno del siglo XXI, dado en la elección del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por el movimiento “Primero Colombia”, fue una alianza de conservadores, liberales y nuevos poderes emergentes, que sintetizó la erosión del sistema partidario tradicional de Colombia y el surgimiento de las nuevas alianzas con intereses políticos-económicos legales e ilegales.

El ex-presidente Álvaro Uribe fue un candidato disidente del Partido Liberal, apoyado por el Partido Conservador que disputó en las urnas frente al oficialista liberal Horacio Serpa. En los recortes de prensa inmediatos a las elecciones presidenciales de 2002, podía leerse la propuesta de Álvaro Uribe del “Gran Pacto de Unidad Nacional” como un logro del candidato independiente para convertirse en “jefe natural de los liberales y conservadores” (Roll, 2002: 305-307), aunque durante el gobierno de Uribe, el Partido Liberal le declaró oposición parlamentaria⁵⁵.

⁵⁵ Al respecto ver: Comunicado. La Bancada liberal decidió marginarse de el debate sobre las reformas a la Justicia y a la Política. Estos son sus argumentos. Martes 26 Agosto 2008; y Comunicado. El director del

Las “terceras fuerzas” de ese momento, el Movimiento “Sí Colombia” de Noemí Sanín tendió a desaparecer; y el Polo Democrático Independiente con la candidatura de Luis Eduardo Garzón, tuvo el reto de organizar y consolidar una oposición política, que posteriormente se agruparía en la candidatura presidencial del Polo Democrático Alternativo con Carlos Gaviria Díaz, para el año 2006, obteniendo la segunda votación nacional, en las elecciones que le dieron la reelección a Álvaro Uribe.

La Reforma Política Constitucional del año 2003⁵⁶, tuvo como uno de sus propósitos, reducir el personalismo y fomentar la agrupación de los partidos políticos, en este sentido, los requisitos de creación de Partidos quedaron plasmados en el Artículo 108 de la reforma⁵⁷, el cual reduce la validez de la participación política al porcentaje de votación obtenida.

Aunque, la postura de Ungar y Arévalo (2004) frente a tal Reforma, resume que ésta disminuyó relativamente el número de listas y la fragmentación de las terceras fuerzas, pero la feria de avales y la ineficiencia representativa de los partidos quedó sin resolver. Por lo mismo, la implementación de la Reforma, no ha concretado el paso a un multipartidismo moderado y una reordenación institucional del sistema partidario colombiano, tan sólo ha obligado al agrupamiento de movimientos políticos para cumplir con los requisitos de número de votación exigidos para otorgar la personería jurídica. Por consiguiente, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se consolidó un sistema de gobierno presidencialista (Sánchez, 2005), donde lo único que unió a facciones tan diversas en la alianza de clases dominantes, fue la figura del presidente Álvaro Uribe (Ungar y Arévalo, 2004: 65).

En resumen, la caracterización de los partidos políticos en Colombia, esta dada por un alto grado de fragmentación y personalismo, un rechazo generalizado de la población al sistema de partidos, una deslegitimación del régimen político, y como resultado una descomposición social en aumento, al no tener una representación partidaria organizada para posicionar las demandas y necesidades de la población en una fuerza política con vocación de poder y compromiso de transformación.

Aspectos teóricos de los partidos políticos, los sistemas de partidos y los movimientos sociales y políticos

La crisis de legitimidad de los partidos políticos y los sistemas de partidos tradicionales es materia de estudio de variados autores. Entre las nuevas formas de gobierno, la “democracia de lo público” (Marín, 1992) es una estrategia electoral de los candidatos y de los partidos, basada en la construcción de imágenes personalistas, donde el lazo representativo responde

Partido Liberal, el ex presidente, César Gaviria, respondió a las acusaciones del Presidente Álvaro Uribe, sobre la supuesta alianza del ex mandatario con los Pepes para combatir a Pablo Escobar. Martes 26 Agosto 2008. Disponibles en: www.semana.com

⁵⁶ El resultado de las reformas al sistema de partidos se consignó en leyes decretadas durante el periodo de 1994 al 2005. Entre estas, las leyes 130 de 1994 (Ley Estatutaria sobre partidos políticos), 134 de 1994 (Ley Estatutaria de mecanismos de participación), 649 de 2001 (reglamentación de la participación política de grupos étnicos, minorías políticas y colombianos en el exterior), 892 de 2004 (voto electrónico), 974 de 2005 (Ley de Bancadas) y 996 de 2005 (reglamentación de la reelección presidencial); y de los actos legislativos modificatorios de la Constitución 01 de 2003 (Reforma Política) y 02 de 2004 (Reelección Presidencial). Una descripción sintetizada de los contenidos de cada una de estas leyes puede leerse en el trabajo elaborado por Fernando Giraldo (2007: 127-128).

⁵⁷ “El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso” (Tomado de: www.secretariassenado.gov.co).

principalmente a dos causas: las nuevas técnicas de comunicación y el fuerte papel de las personalidades de los gobernantes. En este cambio se pierde lo que se había comprendido como “democracia de partidos” y se pasa a la tendencia de elecciones por coalición para acceder al gobierno, dado que la fragmentación de los personalismos no permite componer una mayoría absoluta en un solo partido o movimiento político.

Asimismo, la crisis de legitimidad de los partidos políticos y la progresiva pérdida de identidad hacia los partidos de masas, puede indicar un regreso a la noción de elección, en la idea de un gobierno representativo de “notables”. La definición que nos presenta Marín, nos recuerda que:

“La elección ha sido inventada como el medio de llevar al gobierno a individuos que gozan de la confianza de sus conciudadanos. Los candidatos serían individuos que, por su red de relaciones locales, su notoriedad, la deferencia de la que gozan, suscitan la confianza de aquellos que viven próximos o que comparten sus intereses”
(Marín, 1992: 20).

En tanto, esta noción durante el siglo XX paso de la confianza del candidato a la confianza en la organización del “partidos de masas”. En el siglo XXI, Se observa nuevamente una tendencia a la ‘personalización’ del poder, dado que el debate público transmitido por los medios de comunicación ha impulsado la actitud personalista de los candidatos como un determinante de las elecciones.

En este mismo sentido, se propone el concepto de “partido profesional-electoral”, reconociendo que en estos “el elector se hace más independiente, más autónomo, menos controlable y menos expuesto a las presiones de las «oligarquías» descritas por Michels, pero también más sólo y desordenado” (Panebianco, 1995: 510). La evolución de este tipo de partidos puede resultar en la disolución de los partidos como organizaciones y en la transformación de los regímenes políticos en una competencia de empresarios políticos independientes.

El retorno a las concepciones ideológicas, no muestra claridad en “cómo podrían llegar a reconstruirse por esta vía unas determinadas identidades colectivas ni a qué tipo de soluciones político-organizativas podrían ir ligadas” (Panebianco, 1995: 511). La posibilidad de innovar en política por nuevas organizaciones que entren en competencia con los partidos tradicionales, requiere de la participación de “fuerzas «auténticamente revolucionarias»”. Panebianco encuentra las pautas para el futuro de los partidos políticos en dos características de tipo organizativo, según el papel que asuman los movimientos políticos: regímenes democráticos o autoritarismos inéditos. Para el caso en estudio, vale tener en cuenta el registro del tipo de sistema de partidos que se viene configurando en Colombia, según la siguiente alusión:

“Hoy por hoy, los candidatos a los cargos de representación popular se presentan por sí mismos, organizan sus equipos de campaña, diseñan sus estrategias electorales, recolectan fondos de manera autónoma y, los partidos, simplemente reparten avales a diestra y siniestra [...] hoy los candidatos eligen al partido que les concederá el aval respectivo: es decir, estamos entrando en una era dominada por verdaderos “partidos de alquiler”, en los cuales no es el partido que selecciona a un candidato, sino que son los candidatos quienes seleccionan a un partido” (Pizarro, 2002: 8-9).

En este sentido, otras nociones que se pueden revisar son las de “Partido Cartel”, “Catch al party” o “partidos atrapado” (Tcach, 1993; Katz y Mair, 1997). Katz y Mair (1997) relacionan al “Partido de masas” y la emergencia de los “Partido Cartel” con una idea fija de democracia y reconocen en estos modelos etapas de un proceso continuo de cambios. En los “Partidos de masas”, la elección corresponde a “cuotas diferenciales de movilización” y un “prospectivo control popular de la política”, esto es, la competencia electoral esta dada más

por la movilización y asistencia social, que por las transformaciones concretas que puede ejercer la política en las condiciones socioeconómicas de vida de la población en general. En la primera mitad del siglo XX se evidenció un incremento del nivel de compromiso con la base social y por tanto se creyó que los partidos de masas serían el modelo futuro a practicar por los partidos representantes de otros intereses y segmentos de la sociedad (terratenientes, industriales, etc.) los cuales eran crecientemente minorías permanentes para las elecciones.

Sin embargo, Katz y Mair, toman “lo que Kirchheimer (1966) llamó 'partido atrapa-todo'” para indicar el desafío que tenían los partidos políticos al representar sectores sociales predefinidos, en un cambio de época que se caracterizó en Europa y Estados Unidos, por el posicionamiento de un modelo de Estado de Bienestar que garantizó derechos colectivos a casi todos y enfatizó en las necesidades individuales de consumo de ciertos sectores poblacionales (Katz y Mair, 1997: 3).

El resultado del análisis, hizo proponer un nuevo modelo de partido y una nueva concepción de democracia. En la primacía del personalismo de los candidatos por encima de la organización partidaria y del partido por encima de su base social. Este modelo ya no responde a la movilización pero tampoco contiene compromisos de transformación, rompe con la relación [partidos]-[sociedad civil] y toma como nuevo condicionante la relación [partidos]-[Estado], convirtiendo a la política pública como modificante de los intereses a largo plazo de los grupos electorales ante los que el partido electo es responsable y dejando a la sociedad civil aislada o en autonomía de autoconvocarse en organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, etc, sin vocación de toma del poder del Estado; mientras que el Estado es acaparado por los partidos electos, por las reglas que éstos imponen y por la financiación que el Estado les proporciona para su permanencia. En relación a esto, se ha escrito que:

“Los partidos políticos colombianos parecen haber formulado históricamente sus proyectos pensando más en el Estado que en la sociedad [...] Por ello se puede afirmar que, si bien en teoría los partidos políticos pertenecen a la sociedad, en el caso colombiano han cumplido un papel de mayor relevancia en relación con el Estado” (Vargas, 2011: 118).

Los partidos tradicionales que se habían ajustado al esquema de “organizaciones que parecían partidos de masas [...], pero que en la práctica a menudo continuaban enfatizando la independencia del partido parlamentario” (Katz y Mair, 1997: 7), no tuvieron un sector de clase definido en sus seguidores, se dispusieron a convocar la votación de todas las clases, apareciendo en las fracciones internas de los partidos tradicionales la tendencia al modelo de partido “atrapa-todo” que “recluta miembros sobre la base de un acuerdo de políticas más que sobre la base de una identidad social” (Katz y Mair, 1997: 8).

Desde esta perspectiva, las alianzas partidarias corresponden a los intereses puestos en juego al momento de las elecciones, “las selecciones electorales son elecciones entre equipos de líderes más que una competencia entre agrupamientos sociales cerrados o ideologías fijadas” (Katz y Mair, 1997: 9), en la medida en que los intereses de estos personalismos estén en una coalición, o en un 'cártel', que garantice que todos los partidos comparten recursos, el “Gran pacto de la unidad nacional” también pervive.

Los “partidos cártel” garantizan que todos los partidos con mayoritaria votación accedan a la repartición del gobierno, por esto mismo, las campañas electorales se convierten en “capital intensivas, profesionalizadas y centralizadas”, apoyadas financieramente en las subvenciones y demás beneficios otorgados por el Estado. Es muy gráfica la alusión que hacen del “Partido cartel”, al decir que “es posible imaginarse al partido manejando todos los negocios desde un cuartel central, subdividiendo simplemente su lista de correo según circunscripción, región, o

ciudad cuando un grupo de candidatos debe ser seleccionado o cuando deben ser aprobadas políticas locales” (Katz y Mair, 1997: 16).

En este paso de los 'partidos de notables', los 'partidos de masas', los 'partidos atrapa-todo' a los 'partidos cartel', la concepción de la democracia “se transforma en un servicio provisto a la sociedad civil por el estado. La clase política necesita ser renovada, y las elecciones proveen un ritual pacífico por el cual esto puede ser logrado” (Katz y Mair, 1997: 17). La elecciones requieren de la competencia de partidos que legitimen el régimen político y son los partidos que están en el Gobierno quienes definen las reglas del juego democrático para garantizar su permanencia en el poder del Estado.

La diferencia de los 'Catch al party' europeos de la versión latinoamericana, la resalta Cesar Tcacht (1993) al revisar que los partidos atrapa-todo en Europa surgieron en un auge de crecimiento económico, en el otorgamiento de derechos universales por parte del Estado de Bienestar, mientras tanto, en Latinoamérica no se llegó a la consolidación de los principios del Estado-moderno y económicamente estos transitaban por un proceso paulatino de reducción del gasto público y progresiva privatización. En este sentido, la quiebra de los incentivos colectivos y el “sobredimensionamiento por contraste” de los incentivos selectivos, suponía en América Latina el cumplimiento de una regla configurativa: “evitar la sobrecarga de demandas al Estado”. Aunque, la nueva relación de los partidos-cartel no precisa el cumplimiento de derechos universales, sino de la organización de empresas privadas asociadas a las fracciones partidarias de gobierno para ejecutar concesiones y contratos del Estado.

Estas concepciones teóricas de los partidos políticos y los sistemas de partidos, no responden a un enfoque de alianzas partidarias, dado que no dan cuenta de las relaciones de fuerza que se enfrentan con la estructura de clases y los conflictos sociales que se establecen en el proceso de imponer y mantener un régimen político-económico por el gran empresariado. En el caso colombiano, el 'control hegemónico' que ejercieron los partidos tradicionales durante el siglo XX, como el que vienen ejerciendo ciertas fracciones internas del liberalismo en apoyo del partido conservador, permite evidenciar que el 'bloque de poder' se constituyó dentro de una 'alianza de clases' propietarias, para el impulso de determinadas políticas de reducción del Estado. Las distintas fracciones de clases dominantes mediante los partidos políticos tradicionales cumplieron un importante papel en la consolidación del régimen económico neoliberal.

Por su parte, los movimientos sociales y políticos alternativos o denominados “terceras fuerzas”, son la hibridación de fenómenos sociales complejos y diversos. Mauricio Archila Neira (2005) estudió los movimientos sociales a partir de una explicación histórica de la lucha de clases que motivó la protesta social en Colombia entre 1958 y 1990. En este estudio, realiza el balance de las teorías sobre la acción colectiva y concluye que:

“la acción colectiva en Colombia, si bien incorporó parte del imaginario de la lucha de clases, tanto en la forma tradicional, referida a la producción, como en una versión policlasista que incluye también el consumo, no fue la guía de su comportamiento. Ello se debió a que esa lucha de clases se contempló a través del prisma guerrillero —sobre la base de enemistades radicales aún con los 'otros' cercanos—, práctica que no coincidía con el ejercicio cotidiano de muchos actores y de los mismos militantes de la izquierda social” (Archila, 2005: 329).

Según lo anterior, este autor propone que los movimientos sociales se organizan en una relación [sociedad civil]–[Estado]. La función de creación de consenso está en la disputa de fuerzas al interior de los movimientos sociales y de estos en su relación con el Estado. Así, la acción colectiva de los movimientos sociales tampoco cuenta con identidades de clase

definidas, dado que no corresponde a una homogeneidad de la contradicción capital-trabajo, sino a la diversidad cultural que caracteriza la composición social del país (comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, reivindicaciones de género, etc). Esta fragmentación de luchas, hace que el motor de exclusión e inequidad que les es común se disperse en diferentes procesos de resistencia y movilización, debilitando su capacidad de trascender de lo particular a lo general (Archila, 2005: 470).

Por otro lado, Clauss Offe estudió la relación [sociedad civil]–[Estado] en tanto cuestionamiento a los canales institucionales (las elecciones o la representación parlamentaria) como vía adecuada y suficiente de comunicación política. En este estudio tomo el concepto de “paradigma político” para analizar la “nueva política” de los “nuevos movimientos sociales” de la Europa Occidental, en la segunda mitad del siglo XX. Proponía que el problema central que resalta de la democracia moderna es mantener la diversidad y la unidad al interior de la sociedad civil, problema que “encuentra una solución más fácil en sistemas políticos en los que la diversidad de fondo a resolver es una diversidad de intereses; la solución es, sin embargo, más difícil en sistemas con el problema adicional de lograr una mediación entre valores o modelos culturales diversos” (Offe, 1996: 166).

El nuevo “paradigma político” o la “nueva política” de los movimientos sociales, abordan los conflictos de la configuración de valores en relación con los métodos que describe la definición del “paradigma del modo de vida” (Raschke, 1980. En: Offe, 1996). Este se refiere a la politización de cuestiones que no entran en la teoría liberal de lo público y lo privado, sino que entran en un espacio de política no institucional, a estilos culturales, tradicionales y de práctica de vida específicos, que logran un evidente impacto político debido a sus éxitos cuantitativos de movilización. Estos movimientos, poseen unos contenidos dominantes, “el interés por un territorio (físico), un espacio de actividades o “mundo de vida”, como el cuerpo, la salud e identidad sexual; la vecindad, la ciudad y el entorno físico; la herencia y la identidad cultural, étnica, nacional y lingüísticas; las condiciones físicas de vida y la supervivencia de la humanidad en general” (Offe, 1996: 174).

Los contenidos de mayor trascendencia en la composición social son “la autonomía y la identidad”, características que son reivindicadas en especial por las minorías étnicas en Colombia, y que fueron contemplados en la reforma constitucional de 1991. Los planteamientos de Offe (1996) coinciden con los de Archila (2005) en tanto que los actores de los nuevos movimientos sociales, no refieren al código político establecido (izquierda/derecha, liberal/conservador, etc.) ni a los códigos socioeconómicos parcialmente correspondientes (tales como clase obrera/clase media, pobre/adinerado, población rural/urbana, etc.).

La brecha de los movimientos sociales y los partidos políticos, se caracterizó en la Europa occidental por una particularidad, la exigencia de autonomía no se centró en la demanda de libertades económicas (libertad de producción, consumo y contratación), sino en la protección y preservación de valores, identidades y formas de vida frente a la imposición política y burocrática de la política tradicional, dadas las garantías socioeconómicas que el Estado de Bienestar brindó durante ese periodo.

En su lugar, la reivindicación de identidad y autonomía en Colombia, conllevó a protestas sociales con un fuerte carácter organizativo de clase por disputa del poder político y económico, que conllevó al surgimiento de guerrillas con identidades de los sectores campesinos, de las comunidades indígenas y de pobladores urbanos y sus líderes estudiantiles. Los procesos de desmovilización en la década de los noventa de los grupos guerrilleros M-19, Quintín Lame, EPL, PRT y CRS, dieron lugar a una proliferación de formas organizativas que congregaron las simpatías, y que según las figuras históricas que reivindicaban, estas se

transformaron en las fuentes de inspiración de la nueva generación de los movimientos estudiantiles, movimientos de organizaciones indígenas y movimientos que reivindican las luchas de los afrodescendientes.

Así, el conflicto escenificado por una alianza social compuesta por elementos de diferentes clases y de “no clases” Europeo es diferente a la caracterización social de los movimientos latinoamericanos. La dificultad de los movimientos sociales de no contar con formas institucionales para evidenciar su fuerza, éxito, logros y crecimiento, debido a la separación [sociedad civil] / [Estado] se debió, a la deslegitimación de la política institucionalizada y representativa, y en mayor medida, a los factores de represión implementados por las fuerzas del Estado y el para-Estado, que fueron sin duda los que causaron el gran debilitamiento de los movimientos sociales en Colombia.

La nueva teoría política que se ocupe de integrar los lazos entre [sociedad civil] – [partidos políticos] – [Estado], se enfrenta al dilema de proponer salidas para que los movimientos sociales puedan consolidar sus fragmentadas demandas en un proyecto político con incidencia en la toma de decisiones en los espacios de reconocimiento legítimo a nivel local y a nivel global. En el siglo XXI el tema del medio ambiente, los modos de vida, las identidades étnicas y las reivindicaciones de justicia histórica han tomado un lugar central en la política latinoamericana. El momento de giro político con los gobiernos progresistas de la región, pasa por la prueba de llevar a cabo un nuevo “paradigma político” que posibilite la expresión de las demandas de estos movimientos sin la represión de sus protestas, que abra un espacio para que estos puedan incorporarse en la política institucional con el objetivo de disputar democráticamente los escenarios de poder donde son tomadas las decisiones políticas y económicas que a nivel estructural pueden dar respuesta al conjunto de las demandas sociales del presente.

La estrategia extractivista de la nueva fase de capitalismo financiero, esta regresando a Latinoamérica a un modelo económico primario-exportador, en una ola neocolonizadora de compra masiva de tierras, concesiones público-privadas y la estrategia de socios estratégicos que proponen el comercio sur-sur entre los Estados-nacionales latinoamericanos y las mega corporaciones de los gigantes asiáticos. Los países de la denominada periferia, sin importar su orientación política, están reviviendo los principios de progreso y desarrollo, justificando la necesidad de entrada de divisas para la recuperación económica de la última crisis mundial. Por esto, es importante revisar lo que se viene tejiendo en Colombia, entre unas alianzas partidarias dominantes, en contra de las alternativas sociales y políticas, con la ejecución de una política de “seguridad democrática” que posibilita llevar a cabo los megaproyectos de la política económica de “confianza inversionista” para atraer a los grandes capitales inversionistas.

Las Alianzas partidarias dominantes del Siglo XXI

Los ejes tomados para el análisis de las alianzas partidarias de Colombia en los comienzos del siglo XXI, son: 1) la política económica de confianza inversionista; 2) la recomposición de las clases dominantes en un momento de contradicciones internas y de disputa por la conducción del proyecto político hegemónico; y 3) los cambios en la función del Estado que se vienen presentando en la reglamentación del sistema de partidos y sistema electoral.

En el periodo de reelección del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), se organizó el paso hacia lo que se viene denominando como el “proceso de conversión de Colombia en un país minero y cocalero” (Gutierrez y Zuluaga, 2011), con el agravante de la caracterización que nos indica que en Colombia la “precariedad de la presencia del Estado [se expresa] en un

Estado coercitivo y no en uno que dé respuestas a las carencias y demandas sociales” (Vargas, 2011: 119). Esa forma de Estado neoliberal, ha logrado mantener, en medio de la última crisis capitalista mundial, un gran auge de crecimiento económico, de coerción física hacia las poblaciones rurales y de consenso con las poblaciones urbanas.

La reconfiguración del bloque de poder esta dado por el nuevo modelo dominante, que podemos acordar consiste en la “coordinación por parte del centro de diferentes alianzas regionales involucradas en la distribución de rentas a través de redes de agentes políticos, privados e ilegales” (Gutierrez y Zuluaga, 2011: 114). Esta nueva dinámica esta fisurando la hegemonía económica de la región andina y desviando la atención hacia las nuevas regiones de extracción minera. Por esto mismo, el proyecto de reforma al sistema de regalías presentado en el año 2010, busca una distribución de los recursos, una planeación centralizada de las inversiones y la generación de instrumentos para controlar los efectos macroeconómicos de la bonanza minera y petrolera en Colombia (Gutierrez y Zuluaga, 2011: 107).

La política económica de confianza inversionista, se fundamenta en la atracción a la inversión de grandes capitales extranjeros en la exploración y explotación de los recursos minero-energéticos. El proceso de erradicación de los cultivos ilícitos, de desmovilización de grupos paramilitares y el “nuevo” surgimiento de bandas criminales, esta encontrando en el modus operandi de las multinacionales de minería a gran escala, un nuevo centro de alianzas entre actores del capitalismo financiero transnacional con políticos, empresarios y grupos ilegales locales, con el fin de extraer los recursos naturales no renovables de Colombia, lo que representa un incentivo selectivo de gran rubro económico.

La distribución y regulación de las regalías mineras y la captura de rentas de los territorios de exploración y explotación petrolera, esta directamente asociado al cambio del sistema político en Colombia. Los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, dominantes en las regiones de tradición del cultivo de café para exportación y los centros urbanos con mediana industrialización, en los últimos años dieron paso al surgimiento de nuevos movimientos políticos que se están posicionando en las regiones mineras: Cambio Radical, el Partido de la Unidad Nacional y Alas Equipo Colombia, entre otros. Por esto, las alianzas partidarias del “Gran pacto de unidad nacional” que propuso Álvaro Uribe durante sus dos periodos de gobierno y que es línea de continuidad en el proyecto político de la “Unidad Nacional” del actual presidente Juan Manuel Santos, cumplen el papel de articulación de los intereses económicos puestos en juego en la recomposición de las clases dominantes de Colombia.

En esta reconfiguración, las contradicciones internas están haciendo evidente la disputa por la conducción del proyecto político hegemónico. Según los acontecimientos recientes, es posible decir que Colombia se encuentra ante un renovado surgimiento del enfrentamiento entre tres facciones: 1) las tendencias más conservadoras con intereses en los negocios agroindustriales a gran escala de biocombustibles y cereales transgénicos; 2) las tendencias más liberales de industrialización, modernización, apertura económica y libre comercio que están delineando los incentivos al capital extranjero; y 3) una nueva hibridación de intereses regionales por nuevos movimientos políticos y actores armados ilegales por el control territorial político-económico de las zonas mineras.

Por consiguiente, los cambios que se vienen presentando en la reglamentación del sistema de partidos y sistema electoral, evidencia que la función del Estado esta puesta al servicio de los personalismos dirigentes de los partidos políticos en el poder local, regional y nacional. La Reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, tuvo como principal propósito consolidar un sistema de partidos con tendencia personalista, con este, las facciones de los partidos

tradicionales siguen disputando sus intereses en un formato de coalición para mantenerse en el gobierno.

Por su parte, se dice que el gobierno de Juan Manuel Santos “ha creado un escenario de mayor tranquilidad en la vida política y social” (Vargas, 2011: 129), apreciación amable, para el juego de intereses político-económicos que esta cosechando el ex-ministro de defensa, ejecutor directo de la política de Seguridad Democrática durante el periodo 2006-2009, periodo en que, según el informe de Medicina Legal del año 2010, se reportaron 38 mil 255 personas desaparecidas.⁵⁸

En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), se están llevando a cabo las políticas de lo que se ha denominado el país minero-cocalero. Por más de cuatro décadas, se ha financiado el conflicto político, social y armado de Colombia con los activos, por un lado de los cultivos ilícitos, y por otro, de la financiación de la política contra las drogas. En este gobierno, se está tramitando en el Congreso de la República el segundo debate del proyecto de ley para despenalizar el cultivo de la hoja de coca⁵⁹; además, se están firmando los proyectos de exploración y explotación de megaminería a cielo abierto más grandes de la historia de Colombia.

Juan Manuel Santos, jefe de gobierno y jefe de Estado del país minero-cocalero, defiende un modelo agro minero exportador, un régimen de capitalismo financiero transnacional y una política económica que retorna al modelo económico primario exportador dependiente de la inversión del capital extranjero. El gobierno de la “Unidad Nacional” con sus políticas económicas, está orientando la reinserción internacional del país y sus relaciones comerciales, justo en el momento en que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que están caminando los acercamientos a relaciones comerciales con los gigantes asiáticos, China e India, como crecientes demandantes de materias primas.

La coalición partidaria del proyecto de la “Unidad Nacional” no sólo es momentánea para las elecciones, esta proyectada para mantener en el poder la reconfiguración del bloque hegemónico de poder en Colombia, en un momento en que las clases dominantes están en un relevo generacional de liderazgos y en una modificación de las vocaciones empresariales y productivas del país. La supuesta división entre “santistas” y “uribistas”, resulta ser una estrategia que logra confundir el problema de fondo, la disputa de unas clases sociales dominantes movidas por los intereses económicos y políticos que están en juego, y la estrategia de anular del escenario mediático a las alternativas sociales y políticas que están desmantelando la dinámica política tradicional de Colombia, por medio de las demandas de los movimientos sociales y la organización de “terceras fuerzas” partidarias.

Las alternativas a los partidos de la “Unidad Nacional”

Los partidos tradicionales en los comienzos del siglo XXI en Colombia pasaron de un fraccionamiento interno a una fragmentación que creó nuevos movimientos políticos. Las

⁵⁸ La Asociación CIVIS publicó en su portal web un artículo con el siguiente contenido: “En Colombia se registraron 38 mil 255 personas desaparecidas en los últimos tres años, según el último informe ofrecido por Medicina Legal, en este sentido, organizaciones de víctimas aseguran que el problema obedece a grupos paramilitares y agentes estatales que ven en esta práctica una oportunidad de callar a la oposición” Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2010) “Más de 38.000 personas desaparecidas en los últimos 3 años. Informe Medicina Legal, 2010”. 26 de Noviembre. Disponible en: <http://civis.se/Mas-de-38-000personas>. Referimos este artículo, dado que el acceso al informe fue negado por el sitio oficial de Medicina Legal.

⁵⁹ ABOLEDA, Ángela (2012) *Despenalización de los cultivos de coca avanza en el Congreso de la República*. Mayo 9, Wradio.com.co, Disponible en: <http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/despenalizacion-de-los-cultivos-de-coca-avanza-en-el-congreso-de-la-republica/20120509/nota/1685336.aspx>

bases urbanas del Partido Liberal y las bases rurales del Partido Conservador han tomado otras banderas. Los dirigentes han asumido la carrera de empresarios profesionales electorales, ejerciendo la conducción de los partidos que pasaron el umbral de votación exigido en la Reforma política después de las elecciones del año 2006, los cuales fueron: el Partido Social de la Unidad Nacional; el Partido Cambio Radical; el Partido Convergencia Ciudadana; el Movimiento Alas Equipo Colombia; el Movimiento Apertura Liberal; el Partido Colombia Democrática y el Movimiento Colombia Viva.

Para las elecciones parlamentarias del año 2010 la reacomodación de los renovados personalismos de la política tradicional colombiana, quedaron configurados en el Partido Social de la Unidad Nacional y el Partido Conservador que aumentaron su representación en el congreso; el Partido Liberal que mantuvo su votación y el Partido Cambio Radical que perdió participación parlamentaria. En estas elecciones se quedaron sin personería jurídica los movimientos: Alas-Equipo Colombia, Colombia Democrática, Colombia Viva y Convergencia Ciudadana. Todos estos, relacionados con sectores del narcotráfico y de vínculos con la parapolítica (escándalo político que vinculó a congresistas de la coalición del gobierno nacional con grupos paramilitares). Estos últimos, fueron reagrupados en nuevos liderazgos, conformando el Partido de Integración Nacional (PIN) que logró obtener nueve curules en el Senado.

Otros movimientos han tomado la vocería de segmentos poblacionales específicos, el Movimiento Político MIRA de tendencia social cristiana, por circunscripción indígena, tienen personería jurídica el Movimiento Alianza Social Indígena y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia; por circunscripción especial de negritudes en el año 2006 quedaron representados el Movimiento Alianza Social Afrocolombiana; y el Movimiento Político “AFROUNINCA”, situación que cambió en las elecciones de 2010, quedando por esta circunscripción el Movimiento Afrovides y el Movimiento Popular Unido.

Por su parte, el Partido Opción Centro toma en el año 2005 la personería jurídica del Partido Alianza Democrática M-19; luego en el año 2007, se constituye en el partido ambientalista de Colombia denominándose Partido Verde Opción Centro; para el año 2009 cambia sus estatutos y sus líderes pasan a ser los ex alcaldes de Bogotá Luis Eduardo Garzón, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, los cuales crean la estrategia de la “ola verde” que lanzó la candidatura presidencial de Mockus a las elecciones presidenciales del año 2010, disputando en segunda vuelta con el electo presidente Juan Manuel Santos.

Las facciones, fracciones y fragmentaciones de la izquierda colombiana lograron en el año 2006 conformar la coalición política del Polo Democrático Alternativo bajo la exigencia de la Reforma Política de unificar a los partidos políticos con la amenaza de pérdida de personería jurídica sino se cumple con un umbral de votación, correspondiente al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional. Así, bajo un “Ideario de Unidad” se integró al Polo Democrático Independiente y a las fuerzas que componían la coalición Alternativa Democrática (Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete), el fruto de esta unión se reflejó en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, donde el Polo Democrático Alternativo logró convertirse en el partido de izquierda con mayores logros electorales de la historia del país.

En este proceso de unificación de la izquierda colombiana las tendencias internas fueron catalogadas en la prensa del país como 'ala moderada', 'bloque centro' y los 'no alineados'. Los liderazgos personalistas constituyeron el 'ala moderada' en las figuras de Gustavo Petro, Jorge Guevara, Luis Carlos Avellaneda y Gloria Flórez; en el 'bloque de centro' actuaron Carlos Bula, Jaime Dussán, Carlos Romero, Clara López, Iván Moreno Rojas y el ex-alcalde Samuel Moreno Rojas; en los 'no alineados' sobresalieron Jorge Robledo, Gloria Inés Ramírez y

Gloria Cuartas. En el año 2008 se llevaron a cabo las elecciones de consulta interna para elección de 500 delegados al Segundo Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo con una votación total de 571.873 afiliados, divididos en 88 listas que representaron un número no contabilizado de micro-tendencias. Para el año 2012, la votación fue de 160.000 votos para la elección de 750 delegados al III Congreso Nacional, el cual se redujo a las vocerías de Clara López y Jorge Robledo y apéndices de menor votación.

Las alternativas sociales y políticas a la coalición de gobierno del “Gran pacto de la unidad nacional”, fueron convocadas a participar en estas elecciones del Segundo Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo; con el propósito de ser avalados para participar en las elecciones parlamentarias del año 2010. La posibilidad de innovación política por nuevas organizaciones y nuevos liderazgos, en el sentido que Panebianco otorgó a la necesidad de surgimiento de “fuerzas «auténticamente revolucionarias»”, se dio por el ingreso de dos nuevos procesos.

El Movimiento Nacional de Víctimas – MOVICE, que agrupó en la figura de Iván Cepeda (electo a la Cámara de Representantes de Bogotá, 2010-2014) a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a organizaciones sociales y comunitarias y a una parte de la intelectualidad crítica del país; y por el ingreso del Colectivo Vamos Independientes con la vocería de Camilo Romero (aspirante a la Cámara de Representantes de Bogotá en el año 2002 por el Movimiento Político Tienen Huevo, y electo al Senado de la República, 2010-2014), apoyado por una mayoritaria población joven proveniente de organizaciones independientes, por medios de comunicación alternativa, medios de opinión y humor político, y por un encuentro generacional con liderazgos sociales y políticos locales principalmente de los departamentos de Nariño, Tolima, Sucre, la Guajira y en el Distrito Capital de Bogotá⁶⁰.

Este proceso de integración de la izquierda democrática de Colombia, ha sufrido en los últimos dos años una división que esta terminando en la creación de tres frentes. Los hechos ocurridos al interior de la coalición del Polo Democrático Alternativo en la administración de la ciudad de Bogotá en el año 2011, marchitaron la esperanza de la “franja amarilla”, por lo concerniente a la suspensión de la condición de congresista, del ex-Senador Néstor Iván Moreno Rojas, y la suspensión disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación en contra del ex-alcalde de Bogotá, Samuel Gustavo Moreno Rojas. Estos hechos significaron un efecto negativo en la ciudad y en el país para la imagen del Polo Democrático Alternativo, lo cual fue demostrado en las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011.

La frustración y deslegitimación de un proyecto de oposición, declarado progresista y de izquierda en Colombia, dio como resultado la ruptura de quienes se habían reconocido en el 'ala moderada', creando el Movimiento Político Progresistas, con el cual, la candidatura de Gustavo Petro obtuvo la alcaldía de Bogotá, manteniendo un legado de los militantes del Polo Democrático en su administración y renovando el hacer político de los voceros de la llamada “izquierda democrática” de Colombia.

Por otra parte, un sector que hizo parte de los 'no alineados', la denominada izquierda radical, ha emprendido rumbo hacia el nuevo Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Constituido en el “Cabildo Abierto por la Independencia” que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá del 21 al 23 de abril del año 2012. En este, instalaron un Comité Patriótico Nacional,

⁶⁰ Para ampliar este proceso ver: ROMERO, Camilo (2011) El cambio en Colombia: del movimiento social al poder político. Ponencia en el Seminario Internacional 'Los rostros de la democracia en América Latina', 26, 27 y 28 de julio. Panel: Relaciones entre gobierno y movimientos y organizaciones sociales. Bolivia, La Paz. Disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/61396507/Ponencia-Senador-Camilo-Romero-Los-rostros-de-la-democracia-en-América-Latina>

con 23 miembros que designaron cuatro vocerías oficiales representadas por: David Flórez (líder estudiantil); Andres Gil (miembro de la Organización Campesina del Valle del Río Cimitarra); Carlos Lozano (director del Semanario Voz y miembro del comité central del Partido Comunista Colombiano); y Piedad Córdoba (disidencia del Partido Liberal Colombiano). Este movimiento abre paso a la negociación política del conflicto armado, y puede jugar un papel trascendental en un posible acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en diálogos que se adelantan en la Habana.

Asimismo, los procesos de movimientos sociales en Colombia, articulan un gran número de organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, organizaciones de hijos y familiares de las víctimas del genocidio político de la Unión Patriótica, organizaciones de derechos humanos que demandan por los desaparecidos y desplazados de la violencia política del país, y de líderes que tras los procesos de desmovilización de los años noventa no han encontrado en las representaciones políticas partidarias una expresión de cambio. Entre esta amalgama de voces viene construyéndose el “Congreso de los pueblos” como un proceso de carácter social y popular para la construcción de agendas legislativas desde las bases, encontrando vocería política en el líder indígena del Cauca, Feliciano Valencia.

Por otro lado, coexisten organizaciones sociales que tras el legado del movimiento altermundista desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, sostienen una propuesta de cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo sistematizan John Holloway (2002) y Eric Hosbawm (2011); otras que se adhieren a la Carta de Principios del Foro Social Mundial, creado en Porto Alegre en el 2001, la cual plantea una ruptura con las organizaciones partidarias; o que inspirados en las Redes Globales de Resistencia, han llevado a cabo acciones colectivas sin vocación, ni intención, de toma del poder del Estado, a estas se las convoca a ubicarse en alguno de los extensos abanicos que se están reconfigurando en la coyuntura política previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014.

Entre las alternativas, surgió en Medellín, el 8 de agosto de 2012, un encuentro de ciudadanos de todos los sectores políticos, académicos y del mundo periodístico para lanzar un movimiento de opinión denominado “Pido la Palabra”. Este encuentro combina la participación de figuras políticas de alcance nacional como Antonio Navarro y Antanas Mockus, el aliento regional de Ángela Robledo y Alonso Salazar; la presencia del jurista José Gregorio Hernández y de la periodista Claudia López, entre otros, para subrayar una posible candidatura presidencial del académico y exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Por consiguiente, el balance de la participación de las alternativas sociales y políticas de Colombia, en la disputa por el poder político en las próximas elecciones frente a la derecha Santista y la extrema derecha Uribista, esta puesto en: 1) las dificultades político-organizativas que ha demostrado tener la izquierda democrática para competir en las reglas de juego del sistema de partidos y el sistema electoral, direccionadas por el gobierno nacional a través de las instituciones del Estado colombiano; 2) las posibilidades de cambiar la concepción de dos décadas de movilización antipartidista y antielectoral de los movimientos sociales; y en, 3) la férrea voluntad de integrar un Frente Amplísimo que integre desde el centro del Partido Verde, de los independientes y académicos de Pido la Palabra, hasta los frentes de la izquierda condensados en el Polo Democrático Alternativo, El Movimiento Progresistas, El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y las aspiraciones políticas de los voceros del Congreso de los Pueblos.

Apuntes finales

El momento que vive Colombia en la actualidad, bajo un gobierno que ha manifestado fundamentarse y sostenerse de “Tercera Vía”; supone a las alternativas sociales y políticas claridad en las dificultades y oportunidades que se presentan, para afirmar la vocación de poder político y lograr ser alternativa a la reconfiguración del bloque hegemónico de poder, el cual esta sustentado en las políticas de “seguridad democrática” y “confianza inversionista” para el mantenimiento de la política tradicional en el poder del Estado.

De no ser así, la dinámica de resistencia y acción colectiva de los movimientos sociales podría seguir en la reivindicación de formas de vida dignas para todos y todas, en la denuncia a las violaciones de derechos humanos, con el auspicio de los fondos de Cooperación Internacional, motivados por las Redes de Resistencia Global, por la voluntad de profesionales, empresarios o académicos que comprenden la situación de represión pero que no ofrecen posibilidades concretas de transformación de la realidad.

En síntesis, en Colombia las alianzas dominantes se trazan entre los partidos tradicionales, el poder político emergente y el poder económico que obedece a una clase social propietaria, terrateniente, con vínculos en el sistema financiero y en el sector industrial; sin embargo, de manera histórica enfrentan una disputa entre los extremos de las clases dominantes, una suerte de derecha y extrema derecha, guardando proporciones, muy semejante a la violencia de mediados de siglo XX, entre liberales y conservadores. Las alternativas sociales y políticas enfrentan los problemas históricos de pobreza y desigualdad; de exclusión política, social y económica; de una campaña masiva de estigmatización que tiende a vincular el ejercicio político de izquierda con la combinación de todas las formas de lucha de los grupos guerrilleros; más si se superara la fatal división de las izquierdas, estos problemas serían menores.

La sociedad civil en Colombia, esta apostando a modificar la tendencia de los últimos cuarenta años de abstención electoral y separación de los movimientos sociales y de los ciudadanos independientes de la disputa política electoral. El reto esta en articular las consignas de movilización, denuncia y resistencia; con las de transformación, vocación de poder y disputa electoral para la toma del poder del Estado. La relación [Sociedad Civil] - [Partidos Políticos] - [Estado], pasa también por un momento decisivo para que el gobierno nacional demuestre las garantías de participación democrática y la no repetición de la historia de violencia política en Colombia.

La toma de poder del Estado, para ejercer un control político al modelo económico dominante, es un camino en marcha en América Latina, que si bien tiene tropiezos y errores, estos deben ser estudiados en forma crítica y propositiva, para plantear salidas a la realización de ese otro mundo posible que soñamos.

Referencias

ARCHILA NEIRA, Mauricio (2005) *Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICANH y CINEP, 2005.

GUTIERREZ SANÍN, Francisco (2007) *¿Lo Que el Viento Se Llevó? Los Partidos Políticos y la Democracia en Colombia 1958-2002*. Colombia: Editorial Norma.

GUTIERREZ SANÍN, Francisco; ZULUAGA BORRERO, Paula (2011) *Hacia un país minero: retos para el sistema político y el Estado*. Nueva Sociedad 231. Enero-Febrero. Disponible en: www.nuso.org

GIRALDO, Fernando (2007) *Partidos y Sistema de Partidos en Colombia*. En: RONCAGLIOLO, Rafael; MELÉNDEZ, Carlos. *La política por dentro Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. Perú: Ágora democrática; International idea; y la Asociación Civil Transparencia.

HOLLOWAY, John (2002) *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. España: Editorial El viejo topo

HOSBAWM, Eric (2011) *Cómo cambiar el mundo*. Barcelona: Crítica.

MANIN, Bernard (1992); *Metamorfosis de la representación*. En: Dos Santos, Mario (Comp.) *¿Qué queda de la representación política?*, Caracas: Nueva Sociedad.

MAIR, Peter; y KATZ, Richard (1997) *Organización partidaria y la emergencia del partido cartel*. Capítulo 5 del libro de Peter Mair, "Party System Change". Traducción a cargo de Luciana Cingolani y Ulises Pallares. Inglaterra: Oxford University Press

NOHLEN, Dieter (1994) "Cap. III. Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: una introducción al problema con carácter orientador". En: *Sistemas electorales y partidos políticos*. México: UNAM.

OFFE, Claus (1996) "Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional". En: *Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid, España: Editorial Sistema.

PANEBIANCO, Angelo (1995) *Modelos de Partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid: Alianza Editorial.

PIZZARRO LÉONGOMÉZ, Eduardo (2002) "La Atomización Partidista en Colombia: el Fenómeno de las Micro-empresas Electorales". En: Workig Paper, 292. Kellog Institute for International Studies

ROLL, David (2002) *Rojo difuso y azul pálido. Los partidos tradicionales en Colombia: entre el debilitamiento y la persistencia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales.

SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo (2005) *Bonapartismo presidencial en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá: Uniediciones

UNGAR BLEIR, Elizabeth; ARÉVALO, Carlos Arturo (2004) *Partidos y Sistema de Partidos en Colombia Hoy: ¿Crisis o reordenación institucional?* En: KORNBLITH, Miriam; MAYORGA, Rene Antonio; PACHECO, Simón; y otros. *Partidos Políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio*. Perú: Ágora democrática -Internacional IDEA.

TCACH, César (1993) *En torno al "CATCH ALL PARTY" Latinoamericano*. En: GARRETÓN, Manuel Antonio (Editor) *Los partidos y la transformación política de América Latina*. Grupo de Trabajo Partidos Políticos CLACSO. Chile: Ediciones Flacso-Chile; Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo (2011) "El sistema político colombiano al inicio del gobierno de Santos". En: Nueva Sociedad 231. Enero-Febrero. Disponible en: www.nuso.org